

Postextractivismo y alternativas al desarrollo desde la sociedad civil

Eduardo Gudynas³⁵

Estas y otras ideas han sido discutidas en el marco del Grupo Permanente de Trabajo del que estoy agradecido; en especial los comentarios de Miriam Lang, Pablo Ospina y Maristella Svampa

Introducción

Desde la sociedad civil se está desplegando una gran variedad de iniciativas y reacciones políticas frente al amplio campo del desarrollo. Llama la atención que se discuta sobre los objetivos del desarrollo, se denuncien sus impactos sociales y ambientales, y hasta se reclamen estrategias alternativas, mientras que América del Sur disfruta de cierta bonanza económica. En efecto, en el continente se mantiene el crecimiento económico, aumentan las exportaciones y se reduce la pobreza. Es también destacable que esto ocurra bajo gobiernos llamados progresistas, que se presentan a sí mismos como alternativas.

Muchas de esas reacciones ciudadanas se levantan contra uno de los principales motores de ese desarrollo: el extractivismo. Es también en ese terreno donde surgen alternativas para trascenderlo, no solo a él, sino también a las propias ideas de desarrollo que lo explican.

En el presente artículo se ofrece un apretado resumen, por momentos casi esquemático, de diferentes expresiones de la sociedad civil frente al extractivismo, y en particular las alternativas a éste, en América del Sur. Algunos contenidos de esas descripciones han sido tomadas de mis aportes al estudio realizado junto con Alejandra Alayza (disponible en Alayza y Gudynas,

35 Eduardo Gudynas es ecólogo social, investigador en el Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), docente universitario y colabora con distintas organizaciones sociales.

2012). Incluyo, además, algunas observaciones sobre las dinámicas ciudadanas, las respuestas gubernamentales y empresariales, y una sistematización de las disputas en juego.

Reacciones frente al desarrollo dominante

Las ideas convencionales acerca del desarrollo lo entienden como un continuado progreso que se desenvuelve en varios planos, todos vinculados entre sí, como el crecimiento económico, el avance de la ciencia y la tecnología, o una construcción política y cultural a imagen de los países industrializados. El desarrollo es, por lo tanto, un conjunto de conceptos, sus institucionalidades y prácticas, tal como se analizó en un aporte anterior (Gudynas, 2011). Entendido en esa pluralidad, el desarrollo es una idea dominante, donde una de sus expresiones actuales más vigorosas es el extractivismo.³⁶

Frente al desarrollo en general y al extractivismo en particular, existen posturas de todo tipo. Hay quienes lo ambicionan e, incluso, lo reclaman; los gobiernos lo prometen; y, distintos grupos empresariales lo implantan. Es común la defensa del extractivismo minero o petrolero, pues son vistos como una bendición que aseguraría enormes exportaciones, muchos empleos, y otros beneficios económicos.

En el caso particular del extractivismo, distintos sectores de la sociedad civil se han encontrado con graves impactos sociales y ambientales, escasos beneficios económicos —cuando no perjuicios— y hasta diversas formas de violencia sobre sus comunidades. Esas experiencias no solo explican la resistencia al extractivismo,

36 Aquí se define extractivismo en un sentido preciso y acotado: extracción de grandes volúmenes de recursos naturales, que en su mayor parte son exportados, sin procesar o con un procesamiento limitado. Bajo esta definición, el extractivismo incluye los sectores de explotación minera y petrolera, algunos monocultivos de exportación y varios rubros tradicionales como el banano, la caña de azúcar o los camarones.

sino también los recelos frente a las promesas del desarrollo, al encontrar que éste encierra inequidades e impactos de todo tipo.

Las denuncias y resistencias frente al extractivismo han ganado en intensidad y, al menos en el caso sudamericano, se han difundido a todos los países. Esta nueva situación, a su vez, determina la línea de base desde la cual ahora se discute el desarrollo. Algunos puntos destacados en esos conflictos deben ser señalados, sin pretender resumir toda su diversidad.³⁷

Comencemos por señalar que esas resistencias se expresan de maneras muy distintas. En los países andinos, dichas manifestaciones tienen una larga historia. En Perú, el incremento de la actividad minera y petrolera han provocado el aumento radical de conflictos sociales; algunos de ellos se han convertido en referentes internacionales (como sucedió, por ejemplo, en Tambo grande o Majaz; véase Scurrah, 2008; De Echave y colab., 2009). Más recientemente, el conflicto en Minas Conga (Cajamarca) ha escalado en intensidad, y entre sus expresiones incluyó una larga marcha hacia Lima, de más de un millar de militantes, en contra de la megaminería y en defensa del agua.

En Ecuador, esos conflictos han girado, sobre todo, alrededor de los impactos de la explotación petrolera y, en especial, la contaminación y los daños a la salud en zonas amazónicas. Entre los casos más conocidos, se encuentra la demanda judicial contra la empresa Texaco- Chevron. El inicio de actividades mineras también ha generado oposición: en marzo del 2012, tuvo lugar una marcha nacional por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos. Esta movilización empezó en el sur del país y llegó a Quito.

37 Las descripciones y evaluaciones del presente artículo se basan en la participación del autor y de otros integrantes de CLAES, en distintas actividades, redes o colectivos, especialmente en América del Sur, que incluyen no solo la participación en varios de los procesos que se describen, sino también la defensa de ciertas propuestas, en algunos de esos espacios.

En Bolivia, la situación se ha vuelto más compleja, debido a que hay posiciones a favor, y otras en contra del extractivismo. En estos conflictos están involucrados grupos de mineros (especialmente cooperativistas), que desean profundizar esa actividad e, incluso, llevarla adelante desde empresas estatales; al mismo tiempo, distintos agrupamientos ciudadanos reaccionan por los impactos ambientales de esa minería tradicional y alertan sobre los efectos de nuevos emprendimientos (como la proyectada explotación de hierro de El Mutún). A esto se suman denuncias sobre el manejo petrolero en el sur del país (véase la revisión de Ribera, 2010). Recientemente, ha escalado la resistencia indígena en el oriente del país (TIPNIS) a la construcción de una nueva carretera que, en parte, obedece a los temores frente al ingreso de empresas mineras y petroleras. Así, se cristalizaron dos marchas nacionales hacia la Paz, en 2011 y 2012.

En algunos de estos países, la resistencia al extractivismo involucra a las organizaciones indígenas, de distintas maneras. Una de las expresiones más contundentes son las marchas, tal como ha sucedido en Ecuador (con la participación de su Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE) y en Bolivia (en especial, desde la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB, y con apoyo de algunos sectores del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, CONAMAQ).

Situaciones similares se observan en Colombia, donde grupos indígenas y locales resisten a la expansión de empresas mineras; por ejemplo, lo que sucede en el páramo de Santurbán, o el enfrentamiento a la empresa minera Vale, en el departamento César. En Venezuela, también se registran denuncias por derrames y contaminación, por el deterioro de fosas de contención y por la infraestructura petrolera, etc. (Entre los ejemplos de derrames recientes, se encuentran los vertidos en el río Guarapiche, en febrero de 2012, y el derrame de crudo en el municipio Anaco, en agosto de 2012.) Aunque en menor grado, ocurren protestas y

resistencias contra la minería. (Es el caso de la oposición indígena a la explotación de carbón en la Sierra del Perijá, en el occidente del país).

En Chile, las reacciones ciudadanas frente al extractivismo tienen una larga historia. Entre los conflictos recientes están, por ejemplo, las denuncias por los impactos del proyecto minero de Pascua Lama, la oposición al emprendimiento El Morro y las crecientes movilizaciones en la región de Calama. Por diversos motivos, entre ellos, el contexto político y la consolidada minería, las reacciones experimentan una menor intensidad, en comparación con las observadas actualmente en otros países andinos.

La situación en los países atlánticos presenta algunas diferencias. Allí, una de las principales manifestaciones del extractivismo son los monocultivos de exportación. El ejemplo más conocido es la expansión de la soja en países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, lo que acarrea serios impactos sociales y ambientales. Existen distintas reacciones ciudadanas contra el avance de la frontera agrícola, alertas sobre la deforestación y pérdida de biodiversidad, el uso de agroquímicos y el desplazamiento de pequeños agricultores, campesinos o indígenas (véase, por ejemplo, a Seoane y Tadei, 2011).

Brasil es seguramente uno de los casos más complejos, ya que no solo es un gran exportador agrícola, sino un gigantesco productor minero. A pesar de la existencia de varias acciones ciudadanas frente al avance agropecuario, especialmente en las zonas tropicales, los conflictos sociales ante la minería son más localizados y de menor intensidad respecto de los países andinos, y experimentan mayores dificultades para lograr coordinaciones entre sí.

La minería también se está expandiendo en Argentina, lo que desató intensas reacciones ciudadanas. Se han registrado movilizaciones ciudadanas en por lo menos 12 provincias, con algunos conflictos importantes (obstaculización de carreteras, por

ejemplo) (véase Colectivo Voces de Alerta, 2011). En Uruguay, los planes gubernamentales de promover la megaminería de hierro desencadenaron la oposición de un amplio abanico ciudadano, desde hacendados rurales a grupos ambientalistas. El conflicto se desenvuelve al margen de los partidos políticos, aunque éstos también participan del debate.³⁸

Finalmente, es necesario incluir en este repaso continental lo que sucede en Guyana y Surinam. Allí también se registran protestas en contra de la minería, lideradas, en especial, por comunidades y grupos indígenas. En Guyana, por ejemplo, se registran diversas denuncias y protestas contra la minería de oro de pequeña y de gran escala (IHRC, 2007).

En varios casos, cabe destacar las coordinaciones nacionales. El caso peruano ofrece varios ejemplos sustantivos: existe una red enfocada en el extractivismo en la sierra, que se llama Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI). Una asociación de pueblos indígenas amazónicos aborda esas mismas cuestiones; es la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSESP). Por otra parte, entre sus enfoques temáticos, la red peruana sobre alternativas a la globalización (RedGE) se ha dedicado intensamente a estos temas. Finalmente, algunas de estas cuestiones son atendidas por la Red Muqui. En otros casos, las redes nacionales ya existentes se han volcado a estos temas. Ejemplos de ello son el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) y la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA). Estas dos redes con distintos énfasis, han atacado la problemática extractivista.

Un caso particular se observa en Argentina. Allí, los grupos locales mantienen la red denominada Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Entre sus temas se encuentra el extractivismo.

38 Se conformó el Movimiento por un Uruguay Sustentable. Véase <www.observatorio-minero-del-uruguay.com/2011/06/por-un-uruguay-sustentable/>

Esta asociación se presenta como un espacio de articulación e intercambio, sin autoridades estables; avanza a través de encuentros nacionales.

Finalmente, también existen redes continentales enfocadas en el extractivismo. Destacan el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), con más de 30 instituciones,³⁹ y La Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas, donde participan varias ONG.⁴⁰ El Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, coordinado desde 2011 por la oficina andina de la Fundación Rosa Luxemburg, es otra iniciativa en este sentido. Entre las organizaciones internacionales que se han enfocado estos temas, destaca OXFAM, por su apoyo a grupos locales, estudios y publicaciones. Existen redes de información y coordinación a escala global, donde se incorpora a América Latina; entre ellas sobresale, para el caso de la minería, Minas y Comunidades (MaC),⁴¹ y, para la explotación petrolera, OilWatch.⁴²

La dinámica de la resistencia y el horizonte de las alternativas

Este esquemático repaso permite dar un paso adicional en la caracterización de estas manifestaciones que parten desde la sociedad civil: su heterogeneidad. Algunas de esas expresiones se resumen seguidamente.

Los participantes son muy diversos, desde asociaciones campesinas hasta ONG estructuradas; desde federaciones de nacio-

39 Véase www.conflictosmineros.net

40 Participan CEDLA (Bolivia), Fundación Jubileo (Bolivia), IBASE (Brasil), TERRAM (Chile), Foro Nacional Colombia, CDES (Ecuador), Grupo FARO (Ecuador), FUNDAR (México), Grupo Propuesta Ciudadana (Perú), DAR (Perú), Cooperación (Perú); promovida por Revenue Watch.

41 Véase www.minesandcommunities.org

42 Véase www.oilwatchesudamerica.org

nalidades indígenas hasta redes vecinales. Por lo tanto, el origen social, e incluso étnico, de los actores de estos debates y resistencias es muy diversificado. La discusión actual sobre el desarrollo no tiene un contenido clasista, en el sentido clásico del término. Las acciones colectivas se organizan en estructuras diversas: unas son muy difusas y laxas, propio de un movimiento con mucha permeabilidad en los ingresos y egresos de integrantes; en otras, en cambio, su composición es muy formalizada. Las dinámicas también son muy distintas. En algunos casos son muy activas, y en otros oscilan entre periodos de baja y alta movilización.

La expresión política en los espacios públicos también es muy heterogénea. Algunos transitan sobre todos los canales institucionalizados, tal como se observa, sobre todo, en países del Cono Sur; mientras, en otros casos, la debilidad del Estado y la ausencia de un sistema de partidos estable, hace que, para muchos, esa política apunte a otros canales, mientras que otros intentan constituir agrupamientos partidarios propios.

Más allá de esta diversidad en la estructura y expresión, hay de todos modos ciertas coincidencias notables, que se articulan alrededor de la resistencia al extractivismo actual. Sin duda, la organización comunitaria kichwa de Sarayacu, de la Amazonía ecuatoriana, es muy distinta a la asociación de vecinos de Esquel, en la Patagonia de Argentina; pero las dos representan prácticas políticas de organización desde la sociedad civil, que denuncian, reclaman y resisten con éxito al avance del extractivismo. Esto se repite en todo el continente. Surge desde contextos culturales, políticos y territoriales muy distintos, y atraviesa a muy diferentes movimientos sociales. Estas coincidencias son tan llamativas como la propia diversidad de los actores involucrados.

Esta política, que se expresa desde la base, responde a factores muy diversos, donde se mezclan componentes vinculados con la calidad de vida, los sentidos otorgados a los territorios, las expectativas de beneficios económicos, el papel del conocimiento

experto, formas de participación y reconocimiento, y distintas perspectivas éticas (entendidas como formas de valoración). Esto hace que algunas de las clasificaciones intentadas (de los actores o de los conflictos), no sean satisfactorias para describir estas situaciones.⁴³

Desde un abordaje muy general, es posible identificar dos tipos de dinámicas. En algunos casos, las resistencias de la sociedad civil están enfocadas en emprendimientos locales, y lidian con formas de reforma, participación o compensación de los posibles efectos en juego. Los ejemplos clásicos residen en aquellos conflictos para acceder a la información, el reclamo de cambios tecnológicos en un emprendimiento para reducir sus impactos, o de compensaciones, que pueden ser sociales, laborales, económicas, etc. (incluyendo desde medidas como una bolsa de trabajo, hasta cambios en las regalías). El punto clave para el presente análisis es que en estos casos, casi siempre, lo que se discute son distintas alternativas para hacer viable un emprendimiento extractivo. Por lo tanto, las expresiones políticas están en el campo de los

43 Un buen ejemplo de estas limitaciones es la propuesta de Bebbington y Humphreys Bebbington (2009) de cinco tipos de ambientalismo en los conflictos mineros de Perú. En esa clasificación se separan, por ejemplo, un ambientalismo “nacional populista” de un “ecologismo de los pobres” y éstos del “ecologismo profundo”. Un examen de conflictos recientes muestra que los atributos de una categoría se mezclan con los de otras, y hay expresiones que no responden a ninguna de ellas, de donde esas divisiones se desvanecen. Es muy discutible que los conflictos ante la minería sean “ambientales”, concebidos como diferentes formas entender el ambiente, la sociedad y el mercado. En realidad, en esos conflictos se mezclan diferentes cuotas de componentes que podrían llamarse sociales y ambientales; y entre estos últimos no todos son propiamente ecológicos (como es el caso de las concepciones sobre territorialidad). Asimismo, esa tríada “ambiente/sociedad/mercado” es más un artefacto impuesto desde afuera, propio de ciertas corrientes académicas y políticas, que una expresión que parte desde esos movimientos sociales. El propósito de este ejemplo es advertir, por lo tanto, que algunas clasificaciones recientes no representan adecuadamente las dinámicas de esos movimientos sociales, lo que las hace muy débiles.

“desarrollos alternativos” (entendidos como aquellos que representan distintas corrientes dentro de la hegemonía del concepto de desarrollo, en el sentido precisado en Gudynas (2011) y, a su vez, siguiendo a Escobar (1998).

Pero en otros casos, los grupos involucrados consideran que las reformas o compensaciones no son posibles, y, por lo tanto, los efectos negativos ya no se pueden resolver apelando a cambios tecnológicos o por medio de indemnizaciones económicas, ni bajo la institucionalidad política disponible. Esto sucede a causa de dos factores: los grupos locales entienden que están en juego aspectos de su salud y de su entorno, que son invaluableles, no monetarizables; los grupos locales han modificado la posición de los umbrales que separan los impactos tolerables de los inaceptables, para pasar a niveles de mucha mayor exigencia. Aquí aparece un rechazo al extractivismo, que se expresa en un plano más relevante que los anteriores, lo que permite concluir que es una estrategia inviable e insostenible.

En estos últimos casos se gesta una situación particular, ya que sus expresiones políticas no se detienen en emprendimientos específicos; al contrario, se discute sobre el extractivismo como un componente inseparable de un tipo de desarrollo. Dicho en otras palabras, los debates y conflictos sobre el extractivismo se vuelven inseparables de las disputas sobre el sentido del desarrollo. Es en este campo donde se expresan las opciones críticas al desarrollo. Desde aquí aparecen aquellas que postulan alternativas postextractivistas.

De acuerdo con el marco conceptual que se sigue en el presente capítulo, este segundo tipo de discusiones corresponde a las “alternativas al desarrollo” (también en el sentido de Gudynas, 2011, y a su vez siguiendo a Escobar, 1998). Bajo esa mirada, se ponen en discusión las propias bases de las ideas del desarrollo y sus expresiones concretas; las alternativas al extractivismo, para

ser efectivas, necesariamente deben ser también alternativas al desarrollo que lo sustenta.

Alternativas postextractivistas desde la sociedad civil

En muchos casos, las reacciones frente a proyectos de desarrollo en general y al extractivismo, en particular, incluyeron distintas propuestas en temas como control ambiental, ordenamiento territorial, canales de participación e información, o compensaciones económicas. Aquí se expresan los llamados “desarrollos alternativos”; las discusiones o disputas se enfocan en aspectos instrumentales, como reducir la contaminación u obtener una mayor coparticipación económica.

Poco a poco, en muchos de esos conflictos se comenzaron a incorporar nuevos aspectos que apuntaban el sustento de los emprendimientos de desarrollo. Por ejemplo, la discusión ya no quedó restringida a cómo reducir la contaminación de una mina, sino que se pusieron en entredicho las fundamentaciones bajo las cuales se defendían las estrategias mineras. Esa perspectiva se centra, por lo tanto, en las “alternativas al desarrollo”. En el caso específico del extractivismo, se discuten tanto sus implementaciones específicas (por ejemplo, los proyectos mineros o petroleros), como los conceptos, las instituciones y prácticas que lo hacen posible. Así, el postextractivismo es un conjunto de propuestas de cambio que buscan construir alternativas al desarrollo en sí.

Cuando las demandas populares siguen ese camino, se vuelve un hecho común que, desde ámbitos gubernamentales, empresariales, e incluso desde varios espacios ciudadanos, una y otra vez, se diga que si el extractivismo es tan negativo, sus críticos deberían presentar alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Es la pregunta que busca defender el desarrollo dominante, y asimismo, desafiar a la sociedad civil. Más allá de entender si este reclamo es adecuado o no, lo cierto es que dado el nivel de adhesión cultural que tienen las posturas extractivistas, es inevitable elaborar esas

alternativas con más detalle si se quiere ampliar la base social que reclama cambios.

Existen varios antecedentes de propuestas postextractivistas. Entre los más tempranos, se debe destacar la idea de un Ecuador postpetrolero para poder, por ejemplo, asegurar la protección de la Amazonía (Martínez, 2000). Esa idea fue retomada años después con la iniciativa de la no explotación de las reservas petroleras ubicadas en la zona del Parque Nacional Yasuní, y una moratoria petrolera en otras regiones de la Amazonía, lo que a su vez permitió la subsiguiente iniciativa gubernamental Yasuní-ITT. Más allá de la suerte de esa propuesta, lo cierto es que la discusión en Ecuador cambió sustancialmente. Ya no quedó enfocada en la validez que pudiera tener la renuncia a la explotación petrolera, sino que pasó a considerar cómo llevarla a la práctica (véase la recopilación de las diferentes posturas, en Martínez y Acosta, 2010). Algunas de las ideas ecuatorianas pudieron avanzar más en tanto aprovecharon los cambios políticos en marcha en el país. Destaca la aprobación de una nueva Constitución, donde se reconocen los derechos de la Naturaleza y un régimen enfocado en el Buen Vivir.

En cambio en Bolivia, la situación fue distinta. Si bien se intentó una refundación estatal, la estrategia gubernamental apuntó a acentuar todavía más la estrategia extractivista de su economía. Allí, el debate se centró en distintos desarrollos alternativos. Los actores estuvieron particularmente preocupados sobre el control Estatal y la proporción de excedentes que se pudieran captar. La nueva Constitución, a diferencia de lo que sucedió en Ecuador, brindaba menores oportunidades para transitar hacia el postextractivismo (por ejemplo, no reconoció los derechos de la Naturaleza, y el Buen Vivir no pasó de ser un mandato ético). La situación se complica aún más, cuando el gobierno de Evo Morales despliega una fuerte retórica a favor de los “derechos de la Madre Tierra” a nivel global, especialmente en

relación con el cambio climático, pero no los defendía dentro de sus propias fronteras. Más recientemente, el gobierno hostigó a las marchas indígenas en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isoboro Sécore (conocido como TIPNIS). Actualmente, la discusión sobre el postextractivismo se ha potenciado gracias a los talleres patrocinados por LIDEMA en La Paz, y por distintas organizaciones de la sociedad civil en Cochabamba (destaca el papel del Centro de Documentación e Información de Bolivia, CEDIB).

En Colombia, si bien existen varios ejemplos de resistencias ciudadanas al extractivismo, su contexto interno, asolado por altos niveles de violencia y un gobierno conservador, limita el surgimiento de un movimiento orientado al postextractivismo. A pesar de ello, los primeros pasos están en marcha, bajo una red que se autodefine como “alter-extractivista”.⁴⁴

En los países del Cono Sur, la discusión de las alternativas se enfocó, por ejemplo, en el sector agropecuario, a inicios de la década del dos mil, tanto en el seno de la sociedad civil como en algunos foros académicos. Se exploraron las salidas de los monocultivos de soja, para impulsar una agricultura diversificada de base orgánica, como parte de un proceso de desmaterialización y regionalización de las economías (véanse, por ejemplo, los casos de estudio en Gudynas, 2002). Más recientemente, en Argentina se dieron pasos iniciales hacia el postextractivismo, que incluyen

44 El grupo de organizaciones que discute estrategias postextractivistas incluye a la Corporación Mujeres y Economía, Fundación Comunidades Unidas Pto. Boyacá, Viva la Ciudadanía, Grupo de Investigación Política y Derecho Ambiental CAMPO, Ciase; las universidades Minuto de Dios, Nacional y la Salle; CENSAT; etc. En el caso de la red colombiana frente a la gran minería transnacional, RECLAME, existen posturas diversas en su seno, tanto aquellas que corresponden a los desarrollos alternativos como aquellas que postulan alternativas al desarrollo.

la consideración de los derechos de la Naturaleza (un tema que hasta hace poco era esencialmente andino).⁴⁵

Entretanto, en Uruguay, la discusión de las alternativas a los planes mineros gubernamentales también se enfocan en reorientar lo agropecuario y el turismo, e incluyen un renovado interés en las estrategias de desarrollo del país. En ese marco, por ejemplo, tuvo lugar una aplicación muy interesante de un instrumento de democracia deliberativa.⁴⁶

En cambio en Brasil, por ahora, no existe una discusión significativa sobre estos temas, a pesar del reciente proceso de reforma de su ley de minería y del análisis del régimen de explotación de su petróleo en la plataforma oceánica. La situación en ese país es muy particular, ya que por momentos parecería que no se ha tomado conciencia dentro de Brasil, que es el más grande explotador en minería de América Latina. A su vez, entre las pocas organizaciones que abordan el tema del extractivismo, hay un énfasis en discutir mecanismos posibles de gestión tecnológica, acceso a un mayor nivel de compensaciones económicas o el papel de un fondo soberano para invertir las regalías. Existen algunas redes nacionales, como la de los afectados por la empresa minera Vale, aunque prevalece una mirada neoextractivista que, más allá de disputas sobre emprendimientos puntuales, está a tono con las posturas gubernamentales. Se han llevado a cabo algunos eventos puntuales sobre alternativas postextractivistas. Se lanzó un observatorio ciudadano sobre la explotación petrolera en la plataforma

45 Entre las instituciones más activas se encuentran una asociación de abogados ambientalistas (AADI), ONG como CEPPAS y Jóvenes por la Igualdad, y un colectivo de académicos y militantes, Voces de Alerta. Véase <<http://postextractivismo.blogspot.com/>>

46 El instrumento era un “juicio ciudadano”, promovido por la universidad estatal, y que por su dinámica y contenido obliga a discutir la minería en el contexto de los desarrollos posibles. Véase <<http://www.juiciociudadano.org/mineria/>>

oceánica y sobre minería.⁴⁷ Algunos académicos o militantes los han promovido (por ejemplo, Verdum, 2009). Pero las grandes redes ciudadanas u ONG todavía no han incorporado como un elemento central una discusión postextractivista.

Haciendo posible la idea de alternativas: el caso peruano

Es oportuno ofrecer una descripción un poco más detallada del caso peruano, por su éxito en lograr pasar, en poco tiempo, de una situación donde la idea de una “alternativa al extractivismo” era casi una herejía, a una situación donde esa postura se instaló en el debate nacional.

En el marco de un país con una enorme cantidad de conflictos sociales frente a la minería y petróleo, un puñado de actores comenzaron a discutir posibles vías alternativas. Debe tenerse muy presente que en el pasado reciente de Perú, postular que existen “alternativas” al extractivismo no era sencillo, y en general no cosechaba respaldos. En efecto, la cultura peruana siempre ha estado embebida por la minería desde los tiempos coloniales, y todavía más, bajo la república. La discusión que enfrentaba a ese extractivismo clásico apuntaba, sobre todo, a reducir sus impactos, a un mayor protagonismo estatal y al incremento de regalías. En otras palabras, el horizonte de lo que eran las alternativas se encontraba en distintas variedades de neoextractivismo, recostado sobre el Estado; de alguna manera, similares a las reformas efectuadas en los sectores petroleros en Bolivia o Ecuador. Pero en esa posición no se discutía la esencia del extractivismo, sino sus formas de instrumentación.

Pero ese mismo contexto permitió dar otros pasos adicionales. En efecto, desde distintos actores se insistió en los serios impactos del extractivismo en Perú, la desatención gubernamental en

47 Promovido por IBASE, FUP, Greenpeace Brasil y Justicia nos Trilhos. <www.observatoriodopresal.com.br>

resolverlos y distintas dosis de prepotencia empresarial. A su vez, los conflictos sociales son muy intensos en ese país; un ejemplo es la crisis en Bagua, Amazonas (2009), con su saldo de muertos. Al mismo tiempo, parte de la opinión pública aparecía más receptiva a las alternativas postextractivistas.

Aprovechando estas circunstancias, diversas organizaciones ciudadanas peruanas, entre ellas, la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), iniciaron un trabajo conjunto para instalar la discusión de “alternativas al extractivismo”.⁴⁸ Esta campaña incluyó varios componentes que se desplegaron más o menos simultáneamente (analizados en detalle en Alayza y Gudynas, 2012).

Por un lado, se instaló un grupo de trabajo de expertos que analizó la situación del país en sus sectores extractivos, y generó distintos análisis sobre las posibilidades de transiciones postextractivistas (que abarcó opciones en agricultura, minería, hidrocarburos y pesca; las implicancias para la política económica; el papel de los gobiernos regionales y los territorios, etc.). Los aportes fueron recopilados en un libro sobre alternativas al extractivismo en el Perú (Alayza y Gudynas, 2011), que fue utilizado en talleres y debates públicos.

Paralelamente, en el marco de la campaña electoral presidencial, se conformó un colectivo de 20 organizaciones y redes nacionales, que lanzaron actividades de incidencia para presentar la idea de alternativas al extractivismo, a la opinión pública y a los partidos políticos. En este flanco, se concretaron varias iniciativas. Distintas organizaciones acordaron una “Agenda Mínima para las Alternativas al Extractivismo”, que cubría sus distintas dimensiones sociales, económicas y ambientales. También se consensuó una “Guía de preguntas a los candidatos para las Alternativas al Extractivismo”, que se presentó a los partidos políticos. En este

48 Informaciones, reportes y documentos sobre la campaña en <<http://alternativasalextractivismo.blogspot.com/>>

caso, el propio proceso de confeccionar las preguntas permitió reforzar el sentido de las alternativas postextractivistas. Finalmente, se confeccionó un “Pronunciamiento Público”, donde se reclamaba que el nuevo gobierno asumiera acciones prioritarias en la gobernabilidad del sector extractivo y para las transiciones postextractivistas.

Todas estas actividades se desplegaron en seminarios, talleres, mesas redondas e, incluso, bajo un activo programa de incidencia con la prensa. Se destacó un masivo encuentro público, donde se presentaron las preguntas a los partidos políticos, y los representantes designados por los candidatos presidenciales hicieron públicas sus respuestas.

Actualmente, las acciones en Perú siguen su marcha. Se han sumado talleres sobre alternativas postextractivistas por sectores (por ejemplo, agricultura) o regionales (por ejemplo, en Cusco y Apurímac). Se han sumado nuevos materiales de divulgación popular de estas ideas (un folleto y un video).

El empuje internacional

A medida que se fortaleció la discusión nacional en algunos países, también avanzaron las coordinaciones internacionales. Como resultado de los talleres, cursos y otros eventos, realizados por CLAES, especialmente en las naciones andinas, se concretó recientemente la plataforma “Transiciones”, que es un agrupamiento abierto de organizaciones ciudadanas.⁴⁹ Los participantes exploran opciones de alternativas al desarrollo actual y le otorgan especial atención al postextractivismo. Vienen desarrollando

49 Participan la RedGE, DAR (Derecho, Ambiente y Recursos naturales) y PDTG (Programa de Democracia y Transformación Global) de Perú; LIDEMA, CEDIB, Casa y CENDA de Bolivia; CEDA de Ecuador; la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de Argentina; y, CLAES de Uruguay. Esta red fue lanzada en Cuzco en 2011. Véase <www.transiciones.org>

encuentros regulares en distintos países, cursos de formación y distintas publicaciones.

En ese marco, en 2012, se organizó un taller de expertos andinos para considerar las opciones del extractivismo a nivel regional (sus resultados se publicarán próximamente); y se concretaron distintos talleres y mesas redondas en Bolivia.

Paralelamente, el Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, convocado por la Fundación Rosa Luxemburg, donde participan intelectuales y militantes de varios países, tiene en su agenda de trabajo las transiciones postextractivistas.

Académicos y sindicalistas

El rol de las instituciones y los actores académicos, en particular las universidades, debe ser considerado. Éstos juegan papeles muy importantes, ya que en muchas ocasiones las empresas y gobiernos apelan a ellos para invocar certezas científicas que fundamenten el extractivismo. Entretanto, las organizaciones de la sociedad civil recurren a otros académicos para desmontar esas fundamentaciones.

La situación actual muestra que, en general, distintos espacios académicos están alejados de estos debates, y otros, en cambio, apoyan decididamente al desarrollo y, con ello, al extractivismo. En efecto, la formación y reproducción de técnicos y profesionales en esos temas, y los vínculos que desde allí se generan con los espacios empresariales, son innegables. A su vez, en algunos países (Argentina y Bolivia), una parte de los excedentes extractivistas captados por el Estado son redistribuidos a universidades.

En paralelo a esas tendencias, hay actores académicos que, desde universidades u ONG, participan activamente en las resistencias al extractivismo y en la discusión de propuestas postextractivistas.⁵⁰ En Argentina, llama la atención el caso de una red

50 Ejemplos ilustrativos son las investigaciones de antropólogos o el Diplomado en industrias extractivas de la Pontificia Universidad Católica del

de académicos de varias universidades y distintas disciplinas, que son muy activos en estos temas, tanto en publicaciones como en seminarios y charlas, en todo el país (Colectivo Voces de Alerta). Esa vinculación es, además, cultivada por algunos movimientos sociales. Se logran construir “contra-saberes” comprometidos con las urgencias de la sociedad civil. Las alternativas al extractivismo también apelan a ese tipo de conocimiento experto.

Las relaciones con el movimiento sindical son posiblemente más tenues, sino más complicadas, que las observadas con los académicos. En efecto, muchos de los sindicatos tradicionales apoyan directa o indirectamente, al extractivismo; de ahí que sus abordajes recientes abandonan las discusiones sobre las estrategias de desarrollo y se enfocan en urgencias muy concretas, tales como salario o acceso al empleo. El apoyo a actividades como la explotación minera o petrolera es muy evidente en las centrales sindicales de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. A su vez, desde allí se generan apoyos políticos a los planes extractivistas de los gobiernos progresistas y, por si fuera poco, algunos de estos sindicatos tienen sus fondos de pensión en ese tipo de empresas (en Brasil invierten en empresas como Petrobras y Vale). Bajo esas condiciones, estos actores tienen enormes dificultades para poder discutir las alternativas al desarrollo. Sin embargo, en Colombia existen algunas experiencias positivas de alianzas entre sindicalistas petroleros y comunidades afectadas por el extractivismo (ver artículo de Tatiana Roa en este libro).

Resistencias al postextractivismo

Las alternativas postextractivistas generan diversas reacciones en los gobiernos, empresas y algunos sectores ciudadanos. En el caso

Perú; el grupo de ecología política en la Universidad Nacional en Bogotá; y, el Centro de Investigaciones sobre Desarrollo (CIDES) de la Universidad Mayor San Andrés de La Paz.

gubernamental, las administraciones conservadoras, pero también las de la nueva izquierda, desde distintas posiciones ideológicas, rechazan estas alternativas, en tanto implican una reducción drástica de las explotaciones mineras, petroleras o monocultivos. Esto se realiza apelando a un amplio abanico de posiciones.

En varios casos se desatienden los reclamos locales. Se sostiene que el extractivismo no implica serios impactos sociales o ambientales, o que estos pueden ser superables o compensables. Un siguiente paso es burlarse de los reclamos e intentar deslegitimar a los actores sociales, al calificarles de “infantiles” o “ignorantes”. O bien atacarlos directamente, aduciendo que en realidad esconden otros intereses “políticos”, o que serán agentes imperialistas o colonialistas. En algunos casos, se ha llegado a condicionarlos legalmente y se intenta cortar sus financiamientos. Se ataca personalmente a los líderes, por ejemplo, al demandarlos judicialmente. Con ello, quedan atrapados en los laberintos judiciales.

Distintos ejemplos de estas reacciones gubernamentales se pueden encontrar en casi todos los países sudamericanos; en algunos, como Bolivia, Ecuador o Perú, son muy expresivos, mientras que en Brasil o Uruguay son más acotados (algunos casos en Gudynas, 2009). También hay situaciones en las que el propio gobierno desmonta avances, como ha ocurrido con la reforma a la consulta previa en Bolivia, o el veto presidencial de Cristina F. de Kirchner a la ley de defensa de los glaciares andinos (que parecería haber sido una concesión a las corporaciones mineras; Bonasso, 2011).

Cuando los conflictos persisten, los gobiernos comienzan a responder de manera más enérgica. Eso incluye intentos para cooptar y dividir organizaciones ciudadanas (como se registra con la embestida del gobierno Morales contra la asociación indígena CIDOB), el uso de distintos tipos de violencia (con el concurso de fuerzas policiales, militares o de seguridad, decretar “estados de emergencia”, como ha ocurrido en Perú), o la nueva ley de

terrorismo interno de Argentina, que puede ser usada contra la movilización ciudadana.

En todas estas reacciones, la defensa del extractivismo también se juega en el plano de los discursos. Los gobiernos lo defienden abiertamente como una forma indispensable para asegurar el desarrollo y, por lo tanto, refuerzan las visiones clásicas del progreso económico, social, cultural y tecnológico. Se insiste en que es necesario e inevitable intensificar la apropiación de la Naturaleza para promover el desarrollo, y así asegurar el bienestar social. De esta manera, los gobiernos y sus apoyos sociales terminan colocando al extractivismo en el centro de sus estrategias de desarrollo.

Al asumir una posición como esta, comienzan a caer en contradicciones con sus propias promesas de alternativas. Por ejemplo, en Ecuador, el mandato constitucional postula redimensionar el desarrollo bajo un régimen del Buen Vivir, y el Plan Nacional de Desarrollo incluso llega a postular una salida de la dependencia extractivista (SENPLADES, 2009). Sin embargo, las acciones concretas de la administración Correa apuntan en sentido contrario: la profundización del extractivismo y, en especial, la reciente promoción de la megaminería. De manera similar, en Bolivia, la nueva Constitución invoca al Vivir Bien, y por ello se esperaba una agenda que comience a explorar el postextractivismo. Pero allí tampoco ocurrió eso; al contrario, el gobierno Morales apoyó todo tipo de aventuras extractivistas, mientras cuestionaba y hostigaba a los movimientos de la sociedad civil.

Entretanto, las empresas o sus asociaciones, sin duda, apoyan el extractivismo. Utilizan medios menos estridentes, que incluyen articulaciones con las cámaras empresariales nacionales, o asociaciones con universidades, para impulsar profesiones técnicas necesarias para sus actividades; desarrollan distintos programas de relaciones públicas, que pueden ir desde el uso de las etiquetas

de la “responsabilidad social empresarial”, hasta el financiamiento de obras sociales, como puestos de salud o escuelas.

Es también muy importante advertir que, en muchos casos, las empresas no tienen necesidad de una gran exposición pública en defensa del extractivismo, ya que ésta es realizada por los propios gobiernos. En muchos casos, como sucede, por ejemplo, en Argentina, Brasil, Chile, Perú o Uruguay, son los ministros quienes defienden a viva voz al extractivismo.

No solo eso, sino que el Estado ni siquiera busca soluciones efectivas frente al extractivismo, y cuando hay mucha presión social, apenas cede en aceptar compensaciones económicas, siempre y cuando no pongan en riesgo la viabilidad comercial y productiva del extractivismo. Son Estados que buscan equilibrios entre el capital y las demandas ciudadanas, aceptan el extractivismo como necesario para el crecimiento económico, y buscan amortiguar sus efectos negativos, al apelar a un asistencialismo monetarizado. Estos Estados, y con ellos los grupos partidarios que los sostienen, abandonaron la búsqueda de alternativas al desarrollo. En administraciones conservadoras, esto puede ser entendible, pero para el progresismo es una renuncia sustantiva.

La dinámica de las políticas sobre las alternativas al desarrollo

Comencemos por una evaluación comparativa del estado de las discusiones sobre postextractivismo en los distintos países de América del Sur. Considerando las campañas y acciones realizadas, la diversidad y el protagonismo de las organizaciones involucradas, su repercusión en los debates públicos, y los contenidos de las propuestas, es posible comparar la situación entre distintos países.

Las actividades más intensas sobre postextractivismo se encuentran en Perú y Ecuador, seguidos por Bolivia; en una situación intermedia, se ubican Argentina, Uruguay y Colombia. Les siguen Chile y Paraguay, y considero que la situación de

mayor debilidad se observa actualmente en Brasil y Venezuela. Este marco comparativo es, sin duda, esquemático y subjetivo (está basado en las percepciones del autor sobre las actividades recientes), pero de todos modos ofrece puntos de referencia para una discusión.

En Brasil se observa una evolución que, por ahora, es distinta a la de sus vecinos. Si bien se registra un número importante de conflictos por actividades extractivas (mineras, petroleras, agropecuaria y forestales), éstas son muy localizadas y circulan bajo andariveles separados (por ejemplo, unas se enfocan en minería y otras, en monocultivos). Además el nivel de coordinación nacional es más bajo (no existen redes análogas a CONACAMI de Perú, con un peso público similar). A diferencia de lo que se observa en los países vecinos, las grandes ONG y grupos académicos, por ahora, no han logrado promover el paso cualitativo de una discusión generalizada sobre las alternativas al desarrollo. Muchos de ellos siguen centrados en cuestiones como el papel del Estado, el nivel de regalías que se aplicará a las nuevas explotaciones petroleras, etc., y no tanto en las alternativas postextractivistas.

Seguidamente se puede abordar la composición y dinámica de las acciones que, desde la sociedad civil, abordan el postextractivismo. Como es de esperar, muchas de las características descritas anteriormente para los movimientos de resistencia se repiten en este caso. En efecto, se observa una gran diversidad de participantes, que va desde actores clásicos, como pueden ser aquellos que provienen de las ciudades junto con organizaciones indígenas, de académicos a líderes del mundo rural, etc. Estos se organizan también de una manera heterogénea, desde redes muy laxas e informales o movimientos, hasta otras que están nucleadas en ONG muy formalizadas.

El debate político ha avanzado significativamente hacia el postextractivismo en aquellos espacios donde la coordinación y cooperación fue más fuerte. En Perú se logró conformar coordinaciones

o redes con miembros que eran de distinto tipo y que, incluso, no necesariamente coordinaban entre sí en otros temas. Allí, la coordinación fue amplia y plural, no cayó en disputas sobre el liderazgo y, de esa manera, las campañas avanzaron sustancialmente.

Las coordinaciones estables también se enfocan en que ese papel sea asumido con energía, y que su función articuladora y moderadora sea aceptada por los distintos participantes. Esta legitimación del liderazgo se observó en la campaña peruana, mientras que en otros países, como Bolivia y Ecuador, no ha sido posible, en tanto hay al menos dos corrientes con distintos enfoques sobre los temas del desarrollo, ambiente y sociedad. Ese tipo de divergencias entre dos perspectivas en la acción ciudadana suele ser común en varios países. En esos casos, el problema es que muchas veces resulta difícil remontarlas, para ganar en una mayor adhesión ciudadana. En Argentina ocurre una situación inusual: una de las redes más importantes (conformada por asambleas ciudadanas), explícitamente evita implantar una coordinación nacional, contar con voceros, etc.

Los problemas para articular demandas locales y campañas nacionales reducen las capacidades de implantar debates sobre alternativas al extractivismo. Este puede ser uno de los factores detrás del retraso brasileño. En ese país hay coordinaciones y movimientos nacionales muy potentes en otras cuestiones, como los enfocados en las represas hidroeléctricas o de los sin tierra;⁵¹ no obstante, esto no se logró en los temas del extractivismo y postextractivismo.

El papel de los liderazgos personales también es clave. Por ejemplo, en Ecuador, la prédica del economista Alberto Acosta genera un fuerte impulso a esta temática. Acosta desempeña

51 Véase Movimento *dos Atingidos por Barragens* (MAB), <www.mabnacional.org.br>; y Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), <www.mst.org.br>

un papel clave por sus múltiples facetas: es un economista, ha desempeñado cargos de enorme importancia en el gobierno de Rafael Correa (fue ministro de Energía y Minas, y presidente de la Asamblea Constituyente). Se alejó de ese gobierno y ahora lidera la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas. Tiene una larga historia de militancia social junto a muy diversas organizaciones sociales e indígenas.

Por otro lado, en Perú, no existe un liderazgo personal tan fuerte; en cambio, hay un conjunto más numeroso de intelectuales y militantes volcados a estos temas. Varios de ellos participaron en la campaña de alternativas sobre el extractivismo; algunos se desempeñaron en la fase inicial de la administración de Ollanta Humala, pero retornaron a las organizaciones ciudadanas, como resultado de diferencias sobre la estrategia minera gubernamental (los casos más claros son José de Echave y Hugo Cabieses, quienes fueron viceministros dentro del Ministerio del Ambiente, pero renunciaron por la agudización del conflicto frente al proyecto minero Conga). Esas renunciaciones son raras en el contexto latinoamericano y, a mi juicio, tienen una enorme importancia, ya que legitiman las demandas que, desde la sociedad civil, se elevaban frente al extractivismo.

Otra renuncia conocida es la de la militante social brasileña Marina Silva, quien fue ministra del ambiente bajo el gobierno de Lula da Silva. Si bien Silva dejó el gobierno y denunció el debilitamiento de la agenda ambiental, en sus funciones siguientes, especialmente como candidata a la presidencia por el Partido Verde, no defendió una agenda de alternativas al desarrollo ni una postura postextractivista.

En otros casos, y en otros países, muchos militantes o intelectuales accedieron a los gobiernos y, al contrario del caso peruano, permanecen allí, para promover activamente el extractivismo, defender el desarrollo dominante y criticar a las organizaciones sociales. Un caso impactante es el del vicepresidente

Álvaro García Linera, quien no solo alaba al extractivismo, sino que ataca a las organizaciones indígenas.⁵²

Estos casos refuerzan la necesidad de tener presente que plantear alternativas al desarrollo en general, y sobre el postextractivismo en particular, no es sencillo. Demandar una reducción de la minería en un país andino, o de los monocultivos en el Cono Sur, enfrenta muchas resistencias. En momentos iniciales, las discusiones sobre ese tipo de alternativas aparecen en ámbitos acotados, con participación de pocas organizaciones y solamente algunas redes. El concepto de una “alternativa al extractivismo” tiene un alcance limitado en la opinión pública, y es necesario justificarlo una y otra vez.

Pero en algunos casos parecería que se superan las barreras y el debate público se amplía. Se suman nuevas organizaciones a estas discusiones, la base social se pluraliza y participan redes nacionales. Un sector significativo de la sociedad entiende que el desarrollo convencional está encontrando sus límites y considera válida la idea de explorar alternativas a éste. En ese enfrentamiento al extractivismo hay una crítica al desarrollo dominante. Esto no quiere decir que desaparezcan las posiciones enfrentadas, sino que el tipo de debate público ha cambiado en forma sustantiva.

Estos procesos se pueden describir de manera somera al apelar al reconocimiento de tres tipos de disputas políticas⁵³ (que además

52 Es notable advertir las diferencias de opinión de A. García Linera sobre la situación del TIPNIS. Mientras que en el pasado defendía a las comunidades indígenas y su participación directa en la gestión territorial (Orozco Ramírez, García Linera y Stefanoni, 2006), una vez en el gobierno insistió en la intervención de esa zona y la apertura al extractivismo.

53 Se utiliza aquí el término “disputa” en sentido genérico para referirse a debates llevados adelante con vehemencia y energía, y que pueden incluir o no componentes de altercados o conflictos, expresados en el ámbito público y por actores colectivos. El concepto de “política” se lo utiliza también de forma genérica como las expresiones en la arena pública sobre los asuntos colectivos. Reconozco que existen otros aspectos de esta dimensión

se ilustran en el gráfico. Las disputas tipo I o “enfocadas” responden a cuestiones acotadas, que pueden ser casos localizados o temas específicos. Los ejemplos clásicos van desde los reclamos vecinales sobre una fábrica, al rechazo de un emprendimiento minero en particular. La disputa está circunscrita en el sentido que se enfoca, por ejemplo, en resolver la contaminación de una fábrica o cambiar la ubicación de una mina, pero no se discute la validez de los procesos productivos en juego, en cada uno de los casos. De esta manera, el debate está enfocado en los emprendimientos, sea en los procesos en juego o sus ubicaciones; de allí que los cambios y las posibles soluciones solo involucran a éstos.

En las disputas tipo II, las discusiones pasan a abordar el discurso sobre el desarrollo. En estos casos, las cuestiones son colocadas como parte o expresión de un modelo de desarrollo. Por lo tanto, las posibles soluciones (la remediación ambiental o la participación ciudadana), son entendidas como partes inseparables de las ideas que existen sobre el desarrollo. No se excluyen las discusiones ni conflictos sobre casos puntuales; pero esto es ahora parte de un debate más amplio. No están acotados a un proyecto específico, pero terminan involucrando a todos los que corresponden a ese mismo tipo de procesos; por ejemplo, todos los emprendimientos mineros o las regulaciones nacionales sobre participación. En estas disputas tipo II, la discusión se enfoca a los “desarrollos alternativos”, de donde lidia, por ejemplo, con las formas de instrumentalizar el extractivismo, pero no la esencia de ese estilo de desarrollo. La disputa política más común en estos casos reside en abordar el papel que debería tener el Estado en regularlo o cómo aumentar la captura de excedentes. Los cambios que aquí están en juego no sólo afectarán a los proyectos específicos que dispararon las discusiones, sino

“política” enfocada en el desarrollo, pero no es posible discutir las aquí por limitaciones de espacio.

que tendrán consecuencias más allá de éstos; incluso afectarán emprendimientos en sitios donde no hay oposición activa. Esto se debe a que los cambios sobre las prácticas del desarrollo potencialmente afectan a todo un país.

Por último, las disputas tipo III exploran las alternativas al desarrollo. En este caso, el horizonte de las alternativas cambia sustancialmente, y la disputa gira en torno a la propia validez de la idea del desarrollo. La agenda postextractivista es un caso emergente de las disputas de este tipo. En ellas se pone en discusión a todos los emprendimientos extractivos en todo el país; se considera que los instrumentos políticos, institucionales y científico-técnicos actuales son insuficientes para revertir sus impactos. Consecuentemente, una alternativa postextractivista es inseparable de una crítica radical al desarrollo contemporáneo, y la orientación de las prácticas políticas se coloca ahora en el objetivo de trascenderlo.

En las disputas tipo I se puede encontrar una amplia diversidad de actores, y éstos pueden avanzar en forma más o menos independiente entre ellos, con bajos niveles de asociación y coordinación. Este es el caso de varias resistencias al extractivismo en Brasil. En ellas prevalecen los conflictos que pueden encontrar soluciones negociables, sea por reformas técnicas, como por distintas vías de compensaciones (una distinción que se presentó más arriba en este artículo). En las disputas tipo II, al comenzar a abordarse la temática del desarrollo, algunos de los actores envueltos en resistencias al extractivismo encuentran equivalencias en otros actores que están envueltos en cuestiones muy distintas. Por ejemplo, grupos que protestan contra la minería pueden encontrarse con asociaciones campesinas que resisten pérdidas territoriales, y si bien los casos específicos son muy distintos, pueden avanzar en sus diálogos y en la construcción política al debatir sobre los sentidos del desarrollo, en tanto es un campo temático muy amplio que los involucra a todos ellos. Una situa-

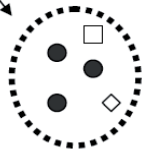
ción similar se encuentra con las disputas políticas tipo III, ya que allí se refuerza todavía más la crítica al desarrollo. Por lo tanto, el tránsito desde disputas tipo I hacia las tipo II y III fortalece las coordinaciones colectivas para la construcción política. Bajo disputas tipo II y especialmente III, los grupos afectados, por lo general, consideran que no existen opciones viables de reformas tecnológicas o compensaciones; así, el debate se trasloca a otros marcos conceptuales.

Solo algunos de los actores envueltos en disputas tipo I pasan a un debate del tipo II, y son todavía menos los que abordan los del tipo III. Por ejemplo, en Perú existen centenas de conflictos ambientales alrededor del extractivismo, pero el grupo de organizaciones que aborda cuestiones de desarrollo es más acotado, y el número que está activamente participando de las iniciativas en postextractivismo es todavía menor. No existe una secuencia necesaria entre estas tres opciones y, de hecho, hay casos donde comunidades locales envueltas en conflictos muy acotados, en poco tiempo aparecen involucradas activamente en disputas tipo III. Posiblemente ejemplos de esos “saltos” se encuentran entre algunas organizaciones indígenas (como en el pueblo Sarayaku en Ecuador). A su vez, los actores que se encuentran en disputas del segundo y tercer tipo pueden permanecer activos en las de tipo I; no existe una exclusión necesaria con ellas. Estas relaciones posibles se esquematizan en el gráfico.

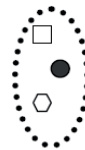
Por otro lado, los conglomerados y articulaciones posibles en las disputas tipo II y especialmente tipo III, permitirían construir mejores alianzas con movimientos ciudadanos de otros continentes, que también buscan alternativas al desarrollo dominante. Estos aportes son importantes, ya que la reducción de extractivismo podría tener mejores posibilidades si se instala una estrategia de decrecimiento del consumo de materia y energía en los países industrializados.

Gráfico. Tipos de disputas políticas sobre extractivismo y desarrollo

DISPUTAS I: ACOTADAS



DISPUTAS II: DESARROLLOS ALTERNATIVOS



DISPUTAS III: ALTERNATIVAS AL DESARROLLO

Representación esquemática de tres tipos de disputas políticas sobre el extractivismo en particular, y el desarrollo en general. Las disputas tipo I están acotadas a casos o temas específicos, y pueden ocurrir sin vínculos entre ellas o con articulaciones limitadas. Las disputas tipo II abordan los desarrollos alternativos y tienden a conformar conjuntos laxos, debido a equivalencias y articulaciones en explorar opciones de desarrollo. Las disputas tipo III expresan alternativas al desarrollo, y entre ellas se encuentran las del postextractivismo. Los símbolos representan distintos tipos de actores sociales organizados; las líneas punteadas engloban de coordinación y vinculación más estrechas.

Fuente: Elaboración propia

Los sentidos de las ideas sobre “futuros posibles” son distintos en cada una de esas disputas. La política de las disputas tipo I y II está enmarcada en un horizonte de reformas instrumentales, dentro de ese desarrollo convencional. Sin duda, se amplían notablemente cuando se consideran las alternativas al desarrollo. En esos casos, un empuje decisivo proviene del aporte de los conocimientos indígenas: sus saberes y sensibilidades son ingredientes claves para poder criticar y desmontar las ideas de desarrollo, en tanto éstas se presentan como naturales y permanentes.

Varios ejemplos ilustran esta cualidad emergente en esa política de las alternativas al desarrollo. Por ejemplo, el reclamo de una moratoria petrolera en la Amazonía se basa tanto en razones tomadas de los saberes expertos convencionales (como la pérdida de biodiversidad o los riesgos ambientales), como en otros argumentos que provienen de una sensibilidad indígena, expresadas en el Buen Vivir o los derechos de la Pachamama.

Los gobiernos, en general, “ven” estas disputas como si todas ellas fueran del tipo I. Es más, las consideran a todas revertibles y compensables. La situación es más dramática para la izquierda gobernante, ya que en el pasado alimentaba los debates sobre el desarrollo; sin embargo, una vez ocupada en la gestión estatal, tiene enormes dificultades para entender las discusiones contemporáneas sobre estos temas. Pero no puede olvidarse que procesos análogos ocurren en el resto de la sociedad, donde la satisfacción por medio del consumo, la seguridad en el empleo y otros componentes, hacen que vastos sectores apoyen esas estrategias de desarrollo convencionales.

Desde la mirada estatal o de los conglomerados políticos, también causa preocupación que las disputas tipo II y III discurren por crecientes niveles de organización y coordinación. Para el aparato estatal y los conglomerados político partidarios en el poder, es importante mantener a las oposiciones políticas divididas y desarticuladas, cuestionar una y otra vez que éstas representen una alternativa, en tanto ese papel es defendido por los propios gobiernos. De esa manera, se evita la concreción de opciones partidarias que podrían conquistar el gobierno. Sin duda, desde las disputas tipo II y III se tejen articulaciones hacia el campo político partidario (por ejemplo, en Perú, con relaciones diversas con Tierra y Libertad; o, en Ecuador, bajo la candidatura de Alberto Acosta, desde la coordinación de las izquierdas). Esas potencialidades determinan que tales expresiones se vuelvan “visibles” para los gobiernos de turno, lo que provoca reacciones

contrarias cada vez más enérgicas. Allí no está en juego solamente unos pocos proyectos específicos, sino que se discute la esencia de las estrategias de desarrollo y el papel de las alternativas.

Alternativas al desarrollo y renovación política

El breve resumen presentado en este capítulo permite afirmar que están en marcha nuevas expresiones políticas alrededor de la temática del desarrollo. No sólo se está remontando el retroceso y quietismo de los últimos años, sino que ahora también se exploran las alternativas a las apreciaciones convencionales del desarrollo. Una de las expresiones más claras de estos cambios reside en las disputas alrededor del extractivismo, y se ejemplifica en las alternativas postextractivistas. Reaparecen las ideas de otros futuros posibles, así como la necesidad de pensarlos y promoverlos.

El impulso de estos cambios no se origina en los gobiernos o en partidos políticos convencionales, sean de izquierda o derecha; ni siquiera en muchos de los viejos movimientos sociales. Ese impulso proviene, en especial, desde la sociedad civil involucrada y organizada en distintas formas de denuncia o resistencia frente al extractivismo, y desde otros actores que acompañan esas expresiones. El concurso de las organizaciones indígenas se ha vuelto clave, especialmente para proveer contenidos que refuerzan los sentidos de alternativas que están más allá del desarrollo convencional de base occidental. De ahí que este empuje proviene de expresiones políticas desde la sociedad civil, bajo un signo intercultural.

En el caso específico de las agendas postextractivistas, se observan avances de distinta índole en muchos países. En todos los casos, ha sido muy importante contar con niveles crecientes de organización, apelar a fuertes dosis de innovación, y volver a tender puentes entre diferentes movimientos sociales. A pesar de todas las resistencias con las que deben lidiar, incluso el hostigamiento gubernamental, la temática postextractivista se está posicionando en varios países. Con ello, no solamente se ofrecen nue-

vas formas de superar la dependencia de los emprendimientos mineros, petroleros o agrícolas, sino también de explorar otras opciones de vida más allá del desarrollo. Este proceso está contribuyendo a una renovación de la política bajo nuevos términos.

Bibliografía

- ALAYZA, Alejandra y Eduardo Gudynas.
2011. *Transiciones. Post extractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú*. Lima, CEPES, RedGE y CLAES.
- ALAYZA, Alejandra y Eduardo Gudynas.
2012. *Sociedad civil y transiciones al postextractivismo: Ensayos, dinámicas y lecciones*. (En prensa)
- BEBBINGTON, Anthony y Dense Humphries Bebbington.
2009. Actores y ambientalismos: conflictos socio-ambientales en Perú. *Iconos* 35: 117-128. .
- BONASSO, Miguel.
2011. *El mal. El modelo K y la Barrick Gold*. Buenos Aires: Planeta.
- DE ECHAVE, José, Alejandro Diez, Ludwig Huber, Bruno Revesz, Xavier R. Lanata y Martín Tanaka.
2009. *Minería y conflicto social*. Lima: Instituto Estudios Peruanos, CIPCA, CBC y CIES.
- ESCOBAR, Arturo.
1998. *La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo*. Norma, Bogotá.
- GUDYNAS, Eduardo (comp.).
2001. *Sustentabilidad y regionalismo en el Cono Sur*. Coscoroba, Montevideo, 2001.
- GUDYNAS, Eduardo.
2009. Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. En Varios Autores, *Extractivismo, política y sociedad*. Quito: CAAP y CLAES: 187-225.
- GUDYNAS, Eduardo.
2011. Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: Una breve guía heterodoxa”, pp. 21-53. En: Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, M. Lang y D. Mokrani (eds.). *Más allá del desarrollo*. Fundación Rosa Luxemburg y AbyaYala, Quito.
- IHRC (International Human Rights Clinic).
2007. *All that glitters: gold mining in Guyana. Human Rights Program*, Harvard Law Scholl, Cambridge. 2007.
- MARTINEZ, Esperanza (ed.)
2000. *El Ecuador Post Petrolero*. Quito, Acción Ecológica; Comisión Nacional Permanente de Conmemoraciones Cívicas (CCE).

- MARTINEZ, Esperanza y Alberto Acosta.
2010. *Yasuní: Entre el petróleo y la vida*. Quito: Abya-Yala y Universidad Politécnica Salesiana.
- OROZCO, Ramírez, Shirley, Álvaro García Linera y Pablo Stefanoni.
2006. *No somos juguetes de nadie...* "Análisis de la relación de movimientos sociales, recursos naturales, Estado y descentralización". La Paz: NCCR Norte Sur, COSUDE y Plural.
- RIBERA A., Marco O. 2010. *El sector minero. Análisis crítico y problemáticas socioambientales de: megaproyecto Mutún, cuenca del Poopó, cuenca del Pilcomayo, megaproyecto San Cristóbal*. La Paz: Lidema.
- SCURRAH, Martin (ed.)
2008. *Defendiendo derechos y promoviendo cambios. El Estado, las empresas extractivas y las comunidades locales en el Perú*. Lima: Oxfam, Instituto Bien Común e IEP.
- SENPLADES
2009. *Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013*. Quito, SENPLADES.
- SEOANE, José y Emilio Tadei.
2001. *Recolonización, bienes comunes de la Naturaleza y alternativas desde los pueblos*. Rio de Janeiro: GEAL y Diálogo de los Pueblos, 2011.
- VERDUM, Ricardo.
2009. Os riscos do neo-extratativismo progressista. *Orçamento e Política Ambiental*, INESC, Brasília, No 23.

pp 189-221, En: "Alternativas al capitalismo / colonialismo en el siglo XXI"
M. Lang, C. López y A. Santillana, compiladoras.
Fundación R. Luxemburg y Abya Yala, Quito, febrero 2013.